



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Popular

Demandante: Luis Sebastián Vásquez y otras

Demandado: Corporación Autónoma de Boyacá – municipio de Tunja

Radicado: 15001 33 33 004 **2018 00125 00**

Ingresa el proceso con informe secretarial, para decidir lo que corresponda respecto a la solicitud elevada por la auxiliar de la justicia Martha Acero y el trámite del recurso de reposición presentado por el actor popular.

1. ANTECEDENTES

- Solicitud de la perito

La ingeniera sanitaria Martha Cecilia Bernal presentó escrito, mediante el cual disintió de la decisión adoptada en auto de 24 de mayo del año de cursa, relativa a negar la solicitud de gastos provisionales por ella elevada, toda vez que, si bien los datos técnicos relacionados con el recorrido, extensión y amplitud del sendero ecológico El Malmo reposan en las entidades demandadas, por lo cual no es necesaria la determinación de estos aspectos, no puede desconocerse que el dictamen sí debe contener la descripción de los desplazamientos, registros fotográficos, planos, impresiones y otros gastos en los que debe incurrir para poder realizar el dictamen, sumas que a, su juicio, ascienden a \$680.000, que corresponden a materiales y viáticos y no a honorarios.

Por tanto, solicitó que, en caso de que las entidades demandadas aporten los criterios técnicos, le sea reconocida esta suma que se utilizará en la realización de la labor encomendada, y de la cual se entregarán los respectivos soportes, de acuerdo lo estipulado en el artículo 230 del CGP.

- Del recurso

Por su parte, el señor Luis Sebastián Vásquez, en su calidad de accionante, interpuso recurso de reposición y en, subsidio, de apelación contra el auto de 24 de mayo de 2018, a través de cual se negaron los gastos provisionales solicitados por la perito y se dispuso que las que las características del sendero ecológico de la Reserva Forestal El Malmo, su amplitud, extensión y recorrido se establecerían con base en los estudios denominados capacidad de carga para el sendero Reserva Forestal “El Malmo” e informe Reserva Forestal Protectora “El Malmo”

El recurrente argumentó que la solicitud de gastos provisionales de la perito resultaba pertinente al ser ella la experta en el tema, además, el peritaje debe ser autónomo y se tiene que acudir a métodos diferentes a los que se establecieron por la entidad accionada, puesto que así no se estaría garantizando el principio de contradicción del mismo; de igual modo, la perito no va a poder evidenciar en el lugar de los hechos lo solicitado en el auto de 18 de octubre de 2018.

2. CONSIDERACIONES

El artículo 36 de la Ley 472 de 1998 señala que los autos dictados en trámite de acción popular serán objeto de reposición en los términos del Código de Procedimiento Civil. No obstante, ante la derogación del mismo, deben aplicarse las reglas del estatuto procesal vigente.

Así las cosas, debe considerarse que en lo relacionado con la oportunidad de este recurso, los artículos 318 y 319 del CGP disponen lo siguiente:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades. (...)

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

Artículo 319. Trámite. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo 110.”

De lo anterior, en el caso concreto, puede concluirse que el recurso ejercido es procedente y fue interpuesto oportunamente, de manera que al estimar que la solicitud de la auxiliar de la justicia y del recurso interpuesto versan sobre el mismo asunto, se resolverán concomitantemente como sigue:

En primer lugar, es importante recordar que, mediante auto de 18 de octubre de 2018, se dio apertura al debate probatorio para lo cual, se decretó, de oficio, una prueba pericial, a efecto de evidenciar las condiciones en que se encuentra el Reserva Forestal protectora “El Malmo” para lo cual el (la) ingeniero (a) forestal, profesional afín o especialista en saneamiento ambiental, debía rendir un concepto técnico sobre las condiciones en que se encuentra el Reserva Forestal Protectora “El Malmo”, así como los efectos que sobre el mismo haya tenido la disposición y uso del sendero eco-turístico, para lo cual debía pronunciarse respecto a los interrogantes que efectuó el Despacho.(f. 103)

Para la realización del dictamen decretado, el Despacho designó a tres expertos inscritos en la lista de auxiliares de la justicia, nombramiento que fue aceptado por la ingeniera sanitaria Martha Cecilia Acero Bernal, quien solicitó la suma de \$2.030.000 por concepto de gastos y viáticos, los cuales como se mencionó fueron negados, mediante auto recurrido.

Así las cosas, al considerar que le asiste razón al actor popular en cuanto a que debe asegurarse la imparcialidad de la prueba y que, a fin de conocer las condiciones reales de la reserva forestal El Malmo, es necesario que la profesional designada realice el dictamen como fue planteado inicialmente, comoquiera que no puede basarse, únicamente, en los datos suministrados por las entidades demandadas, sino que también debe verificarlos, en consecuencia, se revocará la providencia de 24 de mayo de 2019.

Ahora, teniendo en cuenta que la Ley 472 de 1998 no reguló lo concerniente a los gastos y honorarios del perito, en aplicación de la remisión normativa consagrada en el artículo 44 *ibidem*, deben aplicarse las normas del Código General del Proceso, específicamente, el artículo 364 que impone a las partes la obligación de pagar los gastos y honorarios que se causen en la práctica de diligencias y en las pruebas que soliciten, y contribuir a prorrata en las pruebas que sean comunes.

Además, debe advertirse que los gastos tienen relación con los viáticos, costos de transporte y demás que sean necesarios para la realización del dictamen, luego, distan de los honorarios del perito que, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, constituyen una equitativa retribución del servicio público encomendado, y que, según lo dispone el artículo 363 del referido Estatuto Procesal, deben fijarse con sujeción a la tarifa oficial, cuando hayan cumplido su cometido, o una vez aprobadas las cuentas mediante el trámite correspondiente.

Asimismo, el artículo 233 *ejusdem* consagra el deber de colaboración de las partes con el perito, facilitándole los datos, las cosas y el acceso a los lugares necesarios para el desempeño de su cargo, y de no hacerlo, tal conducta se apreciará como indicio en su contra. Por consiguiente, estas normas permiten concluir que corresponde al Juez como conductor del proceso, ordenar el pago de los gastos requeridos por el perito para cumplir con su labor, mientras que las partes tendrán el deber de auxiliar al experto en todo aquello que necesite.

En ese mismo sentido, a veces de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, el juez popular debe impartir las ordenes necesarias para obtener los medios probatorios para indispensables para proferir un fallo de mérito, por ello aunque la carga de la prueba, en principio, corresponde a la parte demandante, no puede desconocerse las implicaciones de orden económico y técnico que la experticia conlleva; por consiguiente, a fin de hallar la verdad material, en tanto,

que presupuesto indispensable para la defensa de los derechos colectivos que se discuten dentro de la presente acción, se impondrá tanto a los actores populares, como al municipio de Tunja y a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá el pago de dichos gastos en partes iguales.

Lo anterior, sin perjuicio de que una vez sustentado el dictamen pericial, el Despacho proceda a la fijación de los honorarios de acuerdo con los criterios establecidos por el Código General del Proceso y el Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, del Consejo Superior de la Judicatura, estos son, complejidad del proceso, cuantía de la pretensión, duración del cargo, calidad de la experticia, y requerimientos técnicos, científicos o artísticos propios del cargo, los cuales, según lo dispuesto en el auto de 18 de octubre de 2018, estarán a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

De otra parte, como se señaló previamente, la perito señaló que los gastos solicitados correspondían a alquiler de estación topográfica, desplazamiento del personal y equipo, registro topográfico, plano, impresiones y otros, por tanto, a la luz de lo normado en el inciso final del artículo 230 del CGP *“Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del juzgado.”*, lo cual, implica que con posterioridad a presentación de la experticia, la perito deberá soportar los gastos en que haya incurrido para cumplir su labor, y las sumas no justificadas deberán devolverse.

Por tanto, los gastos se fijarán el monto solicitado, esto es, dos millones treinta mil pesos, que deberán ser cancelados directamente a la Ingeniera Martha Cecilia Acero, a la cuenta bancaria suministrada por ella en el memorial visible a folio 136, en un término de cinco (5) días, correspondiéndole tanto a la parte demandante como a cada una de las entidades cada demandadas la suma de seiscientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos (\$676.667)

En cuanto al recurso de apelación propuesto por el actor popular, es de mencionar que, de una parte, el auto será recurrido y, de otra, este es improcedente pues la Ley 472 de 1998, únicamente, prevé el recurso de alzada para debatir el auto que decreta las medidas cautelares y la sentencia.

De conformidad con lo antes expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja.

RESUELVE

PRIMERO.- Reponer el auto de 24 de mayo de 2019, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Aclarar que la auxiliar de la justicia Martha Cecilia Acero deberá rendir el dictamen, con sujeción a lo dispuesto en el 18 de octubre de 2018, mediante el cual se dio apertura a la etapa probatoria.

TERCERO.- Fijar como gastos provisionales del peritaje la suma de dos millones treinta mil de pesos (\$2.030.000), los cuales deberán ser cancelados por la parte demandante, el municipio de Tunja y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en partes iguales, esto es, \$676.667 cada una, directamente a la ingeniera sanitaria encargada del peritaje en un término de cinco (5) días

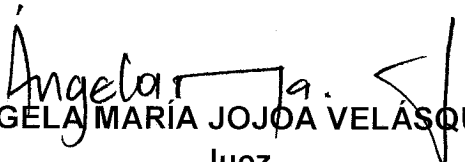
CUARTO.- Advertir que el incumplimiento del deber de suministrar los gastos señalados en el ordinal precedente, será sancionado como falta al deber de colaboración de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 con multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.

CUARTO: Advertir a la perito que, previo a la fijación de los gastos y honorarios definitivos por la práctica del dictamen, deberá acreditar la destinación de los recursos suministrados como gastos provisionales, y reembolsar las sumas que no se acrediten como gasto en la práctica de la labor encomendada.

Las sumas que no se acrediten como gastos y no se reembolsen serán descontadas de las que le correspondan como honorarios por su actividad como auxiliar de justicia.

CUARTO: El termino de quince (15) días para que la auxiliar de la justicia rinda los dictámenes empezará a correr una vez se haya realizado el pago de los mencionados gastos

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

1CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO

Nº 47 De Hoy 24 de septiembre de 2019
a las 8:00 a.m.

FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA

¹ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 24 de septiembre de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández.

